

LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SUR ANDINO EL VALLE DE MOQUEGUA, 1530-1825 ·

POR

TERESA CAÑEDO-ARGÜELLES FABREGA

Universidad Complutense de Madrid.
Departamento de Historia de América

El estudio del campesinado ha sido abordado con interés creciente por la historiografía debido a su indudable relevancia en la configuración de la sociedad andina. Actualmente se están dando cita en este campo especialistas de diversas disciplinas y parece inevitable partir de las estructuras agrarias para indagar en la dinámica de los aspectos culturales de este sector, los cuales, hasta donde hemos podido ver, siempre parecen tener un punto en común con la tierra (1). El conocimiento de los rasgos que definen a la sociedad campesina actual exige, fuera de toda duda, un análisis histórico previo de la trayectoria seguida por el grupo o los grupos objeto de estudio. El mismo no lo consideraríamos sino una etapa más, también preliminar y necesaria, para alcanzar conclusiones de más amplia proyección en torno a un tema que deviene en principal objeto de nuestro interés: las perspectivas de integración de la sociedad rural. Motivaciones de

Trabajo integrado en el proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional I + D, AME 849/9a CO2.

SIGLAS UTILIZADAS:

AAA: Archivo Arzobispal, Arequipa.

ADA: Archivo Departamental, Arequipa.

ADM: Archivo Departamental, Moquegua.

AGI: Archivo General de Indias, Sevilla.

(1) En la obra *La cuestión rural en el Perú*, editada por Javier IGUÑES y publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1988 (3.^a ed.), se reúnen diversos trabajos interdisciplinarios sobre esta temática. También José MATOS MAR ha recogido varios estudios interesantes sobre campesinado en: *Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, "Perú problema 3", Lima, 1976 (2.^a ed.). Dentro de esta línea se inscribe asimismo la obra de Karen SPALDIN: *De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1974. Otros trabajos se irán citando a lo largo del presente artículo.

diversa índole subyacen bajo el desacople de este sector, y ello justifica la necesidad de estudios multidisciplinarios que converjan en el común interés por el campesino. Nuestra contribución, en esta ocasión, se suma a ellos con el propósito de averiguar qué mecanismos contribuyeron a inscribir al indio dentro de la pirámide social durante la Colonia, paso previo de una que consideramos larga etapa hacia su, aún no concluida, transformación en «peruano».

En el Perú, entre 1965 y 1966, el 88 % de las propiedades rurales eran minifundios que apenas alcanzaban para la subsistencia de una familia. La tierra cultivable que correspondía a este sector era el 7,4 %. Mientras tanto, el 1,1 % de las propiedades eran latifundios que ocupaban una extensión fértil del 82,4 % del área cultivable (2). Si admitimos la idea de que el uso eficaz de los recursos exige la compatibilidad de intereses entre los distintos grupos que los disfrutaban, los datos que acabamos de exponer no parece que reflejen el cumplimiento de esta premisa en el agro peruano. ¿Desde cuándo no?

Tomando como principal el marco de análisis el valle de Moquegua (3), veamos en primer lugar qué procedimientos se siguieron en el sur andino para distribuir entre españoles e indios la principal fuente de recursos de que se disponía. El proceso secular que recorre todo el período colonial, hará posible establecer algunas bases sobre los mecanismos que permitieron al indio inscribirse en la sociedad nacional con rango de campesino, y las cuales constituyeron la plataforma sobre la que actualmente descansa su capacidad económica.

(2) Datos procedentes del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), 1966.

(3) Los españoles se instalaron en "Moquehua" en el año 1530. A partir de esta fecha aquel valle del Perú meridional fue adscrito a diferentes categorías administrativas en función de las cuales dependió simultáneamente de diversos centros. Así llegó a constituir una provincia dependiente de Lima; un corregimiento dependiente de Africa, y a partir de 1590 un corregimiento independiente sin perjuicio de que, desde los orígenes coloniales, la mitad sur del valle se mantuviera adscrito al corregimiento de Chucuito; al mismo tiempo las doctrinas de Moquegua dependieron del obispado de Cuzco y luego del de Arequipa; también dependía, desde el punto de vista fiscal, de la Caja Real de Arequipa y desde el punto de vista jurídico, la mitad norte de la Audiencia de Charcas y la mitad sur de la Audiencia de Lima. A partir de 1784 Moquegua se convirtió en un partido dependiente de la Intendencia de Arequipa. Actualmente constituye un Departamento perteneciente a la provincia peruana de Mariscal Nieto.

1. TIERRAS DE ESPAÑOLES *VERSUS* TIERRAS DE INDIOS

La situación estratégica de Arequipa y Moquegua en la ruta que conducía a Potosí desde Lima, había estimulado en estas ciudades y sus áreas de control el florecimiento de una economía proyectada con vistas al abastecimiento de aquel populoso centro minero. Así, desde los inicios de la colonización, su economía se basó en la producción de trigo y maíz y en la crianza de animales para consumo y transporte. A partir de 1572, una vez que el virrey Toledo abrió el puerto de Arica para el abastecimiento directo de Potosí, Arequipa reorientó su economía hacia la producción intensiva de vino —entre 1570 y 1660 se instalaron viñedos en los valles de Vitor, Siguan, Majes y Tambo— al tiempo que Moquegua, se especializaba también en el vino y además en sus tradicionales productos de panllevar (4).

Este valle, durante el período incaico había mantenido estrechas relaciones con el altiplano, constituyendo uno de los más fértiles «enclaves» o «islas», dentro del sistema de verticalidad que la región lacustre impuso para completar su dieta alimenticia. Tras la imposición del nuevo orden colonial, Moquegua siguió manteniendo sus inveterados vínculos con el altiplano a través de los ya habituales circuitos prehispánicos, ahora en términos mercantiles que se vieron estimulados por la intensa demanda de Potosí, y constituyendo el comercio del vino uno de los rubros más importantes de la economía del valle desde los inicios de la colonia. En el *Índice del primer libro notarial de Moquegua*, Franklin Pease ha recogido una importante información acerca de este comercio, en el que participaron tanto españoles como indios (5). Estas coyunturas de apogeo económico, suscitaron la ambición de tierra en los valles propicios para el cultivo, lo que estimularía la aplicación de normativas para su adquisición. Francisco de Solano nos ofrece en su *Cedulario de tierras* un interesantísimo compendio de legislación agraria emitida por la administración (metropolitana y provincial) para regular la distribución del espacio americano en relación con la tenencia de la tierra (6).

(4) Heraclio BONILLA: "Estudios sobre la formación del sistema agrario peruano: logros y perspectivas". En: *La cuestión rural en el Perú*, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1989, pág. 239.

(5) Franklin PEASE: *Índice del primer libro notarial de Moquegua*, Tokio, 1984.

(6) FRANCISCO DE SOLANO: *Cedulario de tierras. Compilación de legislación agraria colonial (1497-1820)*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1948. Existe 2.^a edición, México, 1991. Para una visión de los antecedentes hispánicos en relación con la tenencia de la tierra ver: Guadalupe RIVERA MARÍN: *La propiedad rural en México*. Siglo XXI, Madrid, 1983.

En Arequipa el cabildo se vio presionado a otorgar terrenos o «chacras» a partir de 1557 de los que «se suponían» terrenos baldíos (7), para lo que se valió de mecanismos que trataron infructuosamente de evitar irregularidades (8). Davies menciona la presencia de una comisión que, bajo las órdenes de Hernando Alvarez de Carmona, se encargó de estudiar las vinculaciones de los terrenos fértiles de los valles de Vitor y Mococho, que enseguida fueron medidos y parcelados por orden de cabildo. El otorgamiento (a españoles) de esta «chacras» conllevaba la prohibición de transferirse en venta mientras viviera el primer beneficiario. Pero la especulación encontraría otras vías de filtración por medio de las llamadas «compañías». Estas contraían compromisos con los beneficiarios en virtud de los cuales se avenían a preparar las tierras y a proporcionar los insumos necesarios para ponerlas en producción. A cambio, las mismas eran transferidas, al cabo de los siete años, a dichas compañías. Es así como Antón de Castro logró hacerse en Arequipa con una importante cantidad de estos pequeños lotes que luego revendería, en su mayoría a Diego Hernández de la Cuba, y éste a su vez a Francisco Madueño, dando así origen a las pocas haciendas de tamaño considerable que se registran en la zona (9).

Es muy probable que este Antón de Castro, de Arequipa, estuviera emparentado con el encomendero Juan de Castro, el mismo que en 1557 compró a un cacique de Cochuna (Moquegua), las tierras comunales en su «ayllu», después de haber intercambiado su encomienda de Arequipa por la de Cochuna que pertenecía a Lucas Martínez Begazo (10). Estas tierras se convertirían con el paso del tiempo en los «fundos de Tumilaca», con

(7) El valle de Moquegua —conocido también en tiempos prehispánicos y coloniales como Cochuna y Ubinas respectivamente— mantuvo desde los inicios del período colonial una estrecha relación con Arequipa, ya que, aparte de la dependencia administrativa, parte de sus moradores fueron otorgados en repartimiento a encomenderos procedentes de esta ciudad y de Cuzco.

(8) Fue precisamente por causa de las irregularidades que se cometieron en este aspecto bajo el control de las autoridades locales, que los cabildos llegarían a ser privados de esta prerrogativa, pasando la transferencia de la propiedad a ser competencia exclusiva de la administración virreinal a partir de 1589. En 1692 se creó el Juzgado de Tierras con esa misión específica en el marco de la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras, y cuyo cometido se ampliaría, además, para tratar de mejorar el rendimiento de las mismas. SOLANO [6], págs. 67-72.

(9) Keith DAVIES: "La tenencia de la tierra en Arequipa colonial, 1540-1560". En: *Historia I*, Universidad de San Agustín, Arequipa, 1975, págs. 29-45.

(10) Provisión del virrey Hurtado de Mendoza. Lima, 29 de diciembre de 1559. En: Alejandro MÁLAGA MEDINA: "Los corregimientos de Arequipa. Siglo XVI", en: *Historia I*, págs. 47-85. Univ. de San Agustín, Arequipa, 1975, pág. 78.

los que se organizaría la moderna «Sociedad Agropecuaria José A. de Castro». No conocemos la fecha exacta de la formación de esta sociedad, cuyos terrenos se hallaban todavía en 1968 inscritos dentro de los linderos de la actual comunidad de *Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala*. Sus comuneros, al amparo de la Reforma Agraria, solicitaron ese año en el Ministerio de Trabajo y Comunidades la expropiación de estos fundos «ubicados dentro de su jurisdicción», porque como exponían en uno de los expedientes, «estas tierras —afirmaron en uno de los expedientes— pertenecieron a la comunidad en la antigüedad y les fueron arrebatadas ilícitamente» (11). Sin embargo el sur andino no se caracterizó por la presencia de grandes propiedades. Fernando Ponce, basándose en los libros de matrículas de predios rústicos (no sujetos a tributo), ha registrado la extensión que alcanzaban los fundos de Arequipa para los años de 1843 y 1852. Solamente tres de ellos superan los cien topos —un topo equivale a la tercera parte de una hectárea—, no llegando la mitad a alcanzar valores superiores a los dos (12). Asimismo, los estudios llevados a cabo por Pablo Macera sobre población rural en haciendas hacia 1876, inscriben también a Moquegua entre las zonas con más bajos valores porcentuales de grandes propiedades, respecto al conjunto del territorio peruano (13).

La documentación tanto colonial como republicana, hace mención fundamentalmente a las «suertes de tierras», «topos», «cuartillas» o «fundos». Esta pequeña unidad agrícola disfrutada en régimen de propiedad o arrendamiento, formaba parte de los llamados «predios rústicos» y estaba sujeta al pago de una imposición fiscal distinta del tributo. Los estudios sobre extensión y renta agraria en el Perú, tan sólo incluyen a las tierras adscritas a este régimen fiscal, por ello hasta que se decretó la reforma tributaria en 1854, las investigaciones agrarias en el Perú tienen necesariamente un carácter fragmentario.

Al lado de este tipo de propiedad familiar normalmente en poder de los españoles (criollos o peninsulares) estaban diseminadas las tierras que los indios trabajaban desde tiempo inme-

(11) Archivo del Ministerio de Trabajo, delegación de Moquegua. Dirección General de Asuntos Indígenas. División: "Adquisición de Tierras y Desarrollo Comunal". Expediente 23.375 "B". Esta cuestión ha sido analizada en nuestro trabajo: "Integración de Comunidades Campesinas en el Perú Contemporáneo. ¿Supervivencia o fin?", en: *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, 1991.

(12) Fernando PONCE: "Distribución de la tenencia de la tierra en Arequipa a mediados del siglo XIX". En: *Revista Histórica*, vol. III, nº 2, Lima, 1979, pág. 130.

(13) Pablo MACERA: *Población rural en haciendas, 1876*, Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 1976.

morial en las «inmediaciones» de sus ayllus. A partir de 1572, y en parte para paliar los efectos dispersores que produjo el impacto de la Conquista, el virrey Toledo ordenó la concentración de la población indígena diseminada, en comunidades, a las que les fueron adscritas tierras para su usufructo. De ellas nos ocuparemos en la segunda parte de este trabajo.

Muchos indios se beneficiarían posteriormente de nuevos repartos o «mercedes», pero aún no se cuenta con estudios monográficos que permitan conocer con detalle el origen de los mismos. Ponce hace mención de las tierras que se repartieron a los indígenas de Arequipa en este concepto entre 1732 y 1830 por el subdelegado de la provincia de Cercado, Ignacio Novoa, y por el subprefecto Manuel Amat y León, a raíz de la revisita efectuada en la zona. Este último admitió en 1844 incluso reclamos basados en «derechos adquiridos» (14).

Estas dos modalidades de propiedad que emergen en el Perú tras la Conquista, han sido identificadas como «tierras de españoles» y «tierras de indios». Sin embargo esta clasificación étnica no es excluyente para el sur andino, donde la población indígena logró acceder a la propiedad de sus parcelas por vías frecuentemente desvinculadas del repartimiento y de la merced. A la inversa, algunos españoles también lograron acceder a los repartimientos e ingresar en el grupo de los «tributarios», como después se verá. Por otra parte, es bien sabido que el origen de la propiedad de los españoles estuvo vinculado esencialmente a los repartos de tierra que la Corona otorgó paralelamente a las encomiendas de indios. Pero en ninguna forma se pretendió que las tierras así otorgadas fueran «las» de los indios, aspecto que se trató de cuidar desde los otorgamientos de las primeras mercedes en América (15) y que gozaría de respaldo jurídico a partir de 1571 (16). Aún así debieron producirse multitud de irregularidades en este sentido. Davies subraya la tendencia proteccionista de algunos encomenderos frente a los intentos de usurpación de tierras indígenas, y menciona como ejemplo de ello el pleito presentado en 1557 por la viuda de Miguel Cornejo, Doña Leonor Méndez, cuya encomienda incluía a los indios del valle de Vitor, contra la decisión del cabildo de Arequipa de otorgar terrenos de

(14) PONCE [12], págs. 131-133.

(15) SOLANO [6], pág. 17.

(16) "Real cédula de la Audiencia de Guatemala. Aranjuez, 24 de mayo de 1571", publicada íntegra por FRANCISCO DE SOLANO en *Tierra y sociedad en el Reino de Guatemala*, documento 69, págs. 283-284, Guatemala 1977.

aquel valle a particulares españoles, aduciendo que «las mercedes no pueden otorgarse en esa área porque pertenecen por derecho a los indios» (17). De cualquier manera es evidente que muchos españoles adquirieron o aumentaron su propiedad mediante la enajenación o compra de las tierras de los indios que constituyeran o no su encomienda.

En Moquegua se otorgaron seis encomiendas (sólo una de ellas, la de Ubinas, quedó «en cabeza de su Magestad» (18), y las tierras más fértiles del valle y de los ayllus pedemontanos fueron adquiridas por españoles quienes las sembraron de viñedos, alfalfa o panllevar.

Ya veíamos antes cómo el encomendero de Arequipa Juan de Cstro había comprado a un cacique de Cochuna, en Moquegua, las tierras de su comunidad correspondientes al ayllu de Tumilaca. Otra porción de las mencionadas tierras de Tumilaca pasaron a propiedad del también español Francisco Fernández Dávila, al tiempo que las tierras pertenecientes a los indios de Carumas se las apropiaron en 1777 Juana Mazuelo, Simon Villalobos y Horencio Pérez (19). Cuando el intendente Alvarez y Jiménez visitó la doctrina de Torata en el año 1791, constataba en su *Informe* que la misma carecía de propiedades comunitarias, debido a que «los terrenos —decía— son propios por justos y legítimos derechos de herencia, compras, composiciones, etc. de españoles vecinos de esta villa [Moquegua]» (20).

Las únicas tierras que se respetaron en poder de los indios fueron las más ásperas y difíciles de cultivar, y aún en ellas veremos luego cómo también se instalaron los blancos más pobres adscribiéndose al mismo régimen fiscal de los indios. Y eso fue así a pesar de que la legislación colonial, en un intento de proteger la propiedad indígena, entorpeció el derecho de los indios a la venta de sus tierras si no era con intervención de autoridades locales. No significó esto un obstáculo. En las escrituras de ventas y arrendamientos de los libros notariales de Moquegua, puede constatarse el cumplimiento de esta cláusula a

(17) DAVIES [9], pág. 31.

(18) Estas encomiendas fueron: la de Pochi al capitán Diego Cáceres; Puquina a Diego Fernández Mendoza; Omate a Martín López; Quinistacas a Miguel Cantalapiedra; Carumas a Hernán Bueno y a Lucas Martínez; y Ubinas al Rey. Víctor BARRIGA: *Memorias para la Historia de Arequipa. Relaciones de la visita realizada por el Gobernador-Intendente Don Antonio Alvarez Jiménez*, Arequipa, 1952, vol. 4, pág. 127.

(19) AAA, *Capellanías de Torata*. Moquegua-Torata, legajo 3, 20 de diciembre de 1777.

(20) BARRIGA [17], vol. II, pág. 193.

través de documentos de tenor parecido a éste: «Narciso Coaila, indio principal del pueblo de Omate, *con intervención de don Gervasio Vastarría, mi defensor*, digo que poseo mias propias unas tierras ...y otras por repartimiento del rey... [las cuales] arriendo a los referidos las citadas suertes» (21).

Vemos pues cómo la letra de la ley, en lo que se refiere a los trasposos de tierras, fue sometida a manipulaciones de forma que sirviera a las conveniencias del sector dominante, al tiempo que aparentemente también se aplicaba a los «intereses» de los indígenas, especialmente de los curacas, a los que pronto se les indujo a abrigar expectativas de lucro mediante la venta de lo único de que disponían. Es así como se fue perfilando en esta región del sur andino la propiedad privada de los españoles a expensas de las tierras indígenas.

* * *

Es ya lugar común en la historiografía andina el considerar a los curacas como cauce para el trasvase de la propiedad comunal a propiedad privada, y de la propiedad indígena a propiedad española. En el *Interrogatorio* realizado por el Conde de Canillas en 1690 a los indios de Azángaro, éstos aseguraron que «la causa de ausentarse los indios de los pueblos de esta provincia y otras [Pacajes, Sicasica, Paucarcolla, Cabana, Cabanillas, Canas y Canches], es porque los caciques antiguos les quitaban todas las tierras y pastos y las han arrendado a españoles e indios forasteros, de suerte que los naturales y originarios no tienen en qué sembrar ni pastear sus ganados...» (22). De este *Interrogatorio* se desprende que los destinatarios de las ventas de tierras indígenas no sólo eran españoles sino también «indios forasteros». Estos en gran medida procedían de Potosí, donde en los períodos de *entre-mita* habían tenido la oportunidad de trabajar en las minas como «indios de alquiler» o «de minga» percibiendo por su trabajo en las minas un salario de siete pesos semanales. Este caudal dio a muchos indios ocasión para huir del cerro hacia otras regiones, donde, en calidad de «forasteros» podían eludir sus obligaciones de mita y, a veces, llegar a convertirse también ellos en pequeños

(21) ADA, Sec. Intendencia Civil, fols. 6-9. "Escritura de arrendamiento dada por Narciso Caila, indio principal del pueblo de Omate (Moquegua), en favor de D. Ramon Velarde, español, Arequipa, 11 de mayo de 1801.

(22) Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ: *Indios y tributos en el Alto Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1978, pág. 128.

propietarios (23). Naturalmente que los propios curacas o caciques tuvieron la posibilidad, por la vía que antes mencionábamos, de la transferencia en venta de las tierras y por otros mecanismos relacionados con su función como recaudadores de tributos, de disponer de efectivo para acceder ellos mismos a la propiedad. En otro lugar he subrayado el papel de los curacas como interlocutores entre la comunidad y el Estado colonial, pasando algunos de ellos a convertirse gradualmente en terratenientes (24).

La fórmula ideada por la administración colonial para legitimar la adquisición indebida de tierra con anterioridad a 1591 consistió en la «composición de tierras» o pagos hechos a la Corona con los que se corregían las irregularidades ocurridas en su obtención (25). La primera composición de tierras que tuvo lugar en el Perú se hizo bajo el gobierno de los virreyes García Hurtado de Mendoza (1590-1596), y Luis de Velasco (1596-1604). En 1589 se expidió una real cédula, y en virtud de ella la adjudicación de tierras pasó a ser competencia exclusivamente del gobierno virreinal, por lo que se anulaban las concesiones hechas por los cabildos, siendo la «composición» la única vía para regularizar tierras obtenidas de forma irregular. A instancias de tres reales cédulas sancionadas el 1 de noviembre de 1591, se puso en marcha la primera investigación en el Perú con propósitos de componer tierras (26). En opinión de Ots Capdequí constituyó ésta la única fórmula legal para obtener en propiedad la tierra realenga adquirida mediante ocupación ilícita (27). A ella tuvieron igualmente acceso los españoles y los indios, y éstos sin distinción

(23) "Causas de la disipación de la Provincia de Pacajes. Real Cédula dirigida al corregidor de Potosí, Francisco Sarmiento, el 15 de julio de 1620". AGI, Escribanía, 868, pieza 1.^a. Cf. Teresa CAÑEDO-ARGÜELLES: "Efectos de Potosí sobre la población indígena del Alto Perú. Pacajes a mediados del XVII". En: *Revista de Indias*, nos. 182-183, Madrid, 1988, pág. 16.

(24) Teresa CAÑEDO-ARGÜELLES: *Efectos de Potosí en la estructura de una provincia mitaya. Pacajes a mediados del XVII*. Tesis de Licenciatura, Sevilla, 1976.

(25) Sobre la *composición de tierras* remitimos a los siguientes trabajos de FRANCISCO DE SOLANO: "El régimen de tierras y la respuesta legislativa a la composición de 1591", en: *Actas del IV Congreso Internacional de Derecho Indiano*, México, 1976; "El Juez de tierras y la Superintendencia del Beneficio y composición de tierras", en: *Anuario Histórico-Jurídico Ecuatoriano*, vol. VI, págs. 347-358, Quito, 1980; "La tenencia de la tierra en Hispanoamérica: Proceso de larga duración. El tiempo virreinal", en: *Revista de Indias*, nº 171, págs. 9-26, Madrid, 1983 y "Abusos y errores en la ocupación de la tierra y sus correcciones" en [6] págs. 41-73.

(26) Reales cédulas de 1 de noviembre de 1591, El Pardo, en SOLANO: [6] págs. 269-275.

(27) José M.^a OTS CAPDEQUÍ: *España en América: El regimen de tierras en la época colonial*, México, 1959, pág. 37.

alguna de status. Pease ha estudiado en el *Indice del Primer Libro Notarial de Moquegua* los activos movimientos notariales que este tipo de documentos generó en las tierras «supuestamente» desocupadas de los valles de Omo y Cupina, aunque es imposible saber a quienes pertenecieron en tiempos prehispánicos las tierras compuestas allí por Diego Fernández de Córdoba en 1594 (28), porque toda composición se basaba en precarismo de tierras realengas. La ocupación indebida de propiedad privada tenía que ser reclamada por los afectados en las tribunales de justicia.

Los mecanismos empleados para obtener tierras se ajustaban, o debían ajustarse, a una serie de reglas tendentes a evitar la usurpación y el abuso. En Torata, Alvarez y Jiménez exigió a los españoles que ocupaban las tierras comunitarias de aquella doctrina, sus títulos de propiedad, y, en su defecto, procedió a la composición de tierras según un proceso que involucró a quince españoles y un indio, a pesar de que todos ellos alegaron que aquellas posesiones eran «legítimas en base a tener un carácter sexagenario y haber hecho servicios al Rey, a la causa pública y a la misma comunidad de indios» (29).

El estudio de varios casos en Moquegua, uno de los cuales (correspondiente a la doctrina de Omate) reproducimos aquí en fragmento, nos ofrece una aproximación a los aspectos formales y legalistas que envolvieron este tipo de operaciones, aunque es texto de 1806, cuando el Estado hacía ya un par de siglos que había encontrado la fórmula de venta de tierras baldías, mediante subastas.

Señor gobernador intendente:

Don Rafael Dies Canseco, en el expediente promovido por mí sobre la denuncia que hice de unas tierras eriazas y baldías sitas en la quebrada nombrada Tambillo, que ha dejado como isletas el río de Tambo, y las cuales he pretendido comprar en composición de su Majestad, con lo demás deducido digo: que con arreglo a lo representado por el señor fiscal... fue expedido por el sr. general intendente interino el Auto de 16 de abril del año de 1806, en que teniéndose por admitida mi denuncia, mandó su señoría se midiesen y tasasen las dichas tierras por peritos que yo y el alcalde ordinario de Omate nombrásemos, y que mandándose dar un pregón se devolviese el expediente con

(28) PEASE [5], pág. 166.

(29) BARRIGA [17], vol. II, pág. 201.

lo obrado, informando si dichas tierras pertenecían a indios o a otros particulares.

... Se hizo la mensura y tasación mencionada. Que el valor de aquel terreno importó veinte y cuatro pesos un real y medio. Que habiéndose dado el pregón en el pueblo de Omate no pareció postor alguno. Que las tierras son baldías y sin descubrirse, difíciles en su cultivo por lo laborioso de las tomas que para su cultivo se han de construir. Que están separadas de las tierras del repartimiento del común de indios de aquel pueblo en distancia de mas de cuatro leguas. Que en ellas no hay vestigios de que en tiempo alguno se hubiesen cultivado. Que por esas razones no hacen falta a los indios, ni son de ninguna otra persona sino de nuestro Soberano. En esta virtud... he venido a esta ciudad de la Villa de Moquegua, y ya no resta otra cosa que correrse traslado de todo a los señores ministros de Real Hacienda, para que con audiencia de ellos se den los demás pregones necesarios, y se señale día y hora para el remate...» (30).

Hay que señalar que el 19 de abril de 1814 es decir, ocho años después de iniciarse esta demanda de composición, todavía no se habían concluido los trámites legales que debían favorecerla.

No obstante el espíritu que inspiró esta política proteccionista hacia el indio, la composición de tierras parece haber sido el más significativo expolio contra la propiedad comunitaria de los indígenas. Bien es verdad que al promediar el siglo XVII muchas de las tierras pertenecientes a las comunidades se habían abandonado, unas definitivamente bajo el embate de la aguda crisis demográfica que afectaba en esas fechas a gran parte del área andina, y otras como consecuencia de la movilidad a que se vio sometida la población indígena por efecto de la política económica de la colonia. Entre 1570 y 1620, la población altoandina descendió de 1.045.000 a 585.000 habitantes, mientras que en la costa, para el mismo período se redujo de 250.000 a 87.000 (31). Esta situación contribuyó a dinamizar el proceso de apropiación de tierras «baldías» por parte de los españoles. El virrey Pedro de Toledo y Leyva dio cumplimiento a una real cédula del 27 de mayo de 1631 por la que se ordenaba una nueva visita y compo-

(30) "Petición de don Rafael Diez Canseco para componer tierras en Omate, 16 de abril de 1806". AAA, Sec. Intendencia-Administrativo, fols. 6v-12.

(31) Noble David Cook: *The indian population of Peru. 1570-1620*, Universidad de Texas, Austin, 1970.

sición general de tierras que tuvo lugar entre 1655 y 1661 (32). Tres más se realizarían todavía antes de iniciarse el período republicano: la tercera en 1665, la cuarta entre 1722 y 1725, y una última en 1786 que sería suspendida dos años después por el virrey Croix.

Se nos presenta, pues, un primer panorama de distribución de tierras, cuyos mecanismos no tienen de hecho un carácter excluyente, pero sí claramente discriminatorio, en el sentido de que los mismos estaban manejados por el grupo dominante y priorizaban sus intereses en la captación de las tierras más fértiles. Los datos facilitados por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), y a los que hemos hecho alusión al comienzo de este trabajo, reflejan los efectos de aquel proceso en la situación actual del agro peruano.

2. REDUCCIONES COLONIALES: TIERRA DE ESPAÑOLES Y DE INDIOS

La población española, además de constituir un sector agrario que prosperó en gran medida a expensas de las tierras indígenas, y que por tanto se constituyó en una clase económica opuesta a la de los indios, desafió las leyes coloniales de separación residencial, compartiendo con la población andina un espacio socio-económico y confundiéndose con ella en el marco de las reducciones.

Las leyes coloniales trataron de proteger a la población indígena de los despojos a que se vio sometida tras la conquista, siendo este mismo uno de los objetivos que persiguió el virrey Toledo con la fundación de las «reducciones» a partir de 1570. Estas nuevas unidades de asentamiento trataron de reaglutinar a la población dispersa (33), respetando la antigua estructura de los ayllus. De todas formas, estos tradicionales agrupamientos de linaje, como bien opina Pease, no basaban su unidad y su cohesión en la agrupación física de sus miembros tanto como en la fiesta. Así pues, cuando hallamos en los documentos coloniales referencias a los ayllus, debemos hacer una lectura cauta de lo que en realidad podía significar esta unidad *social*, y en ningún

(32) Real cédula del 27 de mayo de 1631, Madrid, en: SOLANO [6], pág. 331.

(33) Objetivo incumplido para el caso de Moquegua, como hemos fundamentado en nuestro trabajo: "Transculturación en el valle de Moquegua. Un desafío a los ecosistemas de enclave", que va a presentarse en el *Segundo Congreso Internacional de Geografía de las Américas*, Sociedad Geográfica de Lima, Lima-Cuzco, en prensa.

caso dejarnos llevar por la idea de que los futuros «ayllus», «anexos» o «pagos» que se mencionan en la formación de las doctrinas o reducciones coloniales, fueran una exacta prolongación de los «barrios» prehispánicos, aunque conserven hasta hoy el mismo nombre. Descubrir el verdadero perfil de estas unidades forma parte de nuestros propósitos a medio plazo.

A partir de la Visita General realizada por el virrey D. Francisco de Toledo en 1570, los «ayllus» instalados en los valles pedemontanos de Moquegua se inscribieron en un sistema de administración religiosa que dividía el espacio de Moquegua en siete curatos o doctrinas: Torata, Carumas, Ubinas, Omate, Puquina, Pocsi e Ichuña; de ellas hemos seleccionado la doctrina de Torata como marco de análisis. Esta doctrina se constituyó en el año 1638 con los componentes de ocho «anexos» o «ayllus» prehispánicos: Torata, Yacango, Tumilaca, Pocata, Chuquisquea, Otorá, Queli e Ylubaia (34). Hampe ha señalado que la legislación colonial trató de preservar en lo posible las características sociales «típicas de la vida interior, cotidiana de las comunidades nativas» (35). Pero ciertamente es muy poco lo que se sabe acerca de la organización interna de estas unidades socioeconómicas configuradas por el virrey Toledo en 1572. Los etnohistoriadores hemos sido retados a llevar a cabo trabajos analíticos que ofrezcan respuestas fiables para todos los interrogantes que aún quedan por contestar en torno a su funcionamiento. La administración eclesiástica, a través de los expedientes que tramitó en relación con estas unidades puestas bajo su control, nos ofrece hoy la oportunidad de manejar una documentación, cuya adecuada lectura puede contribuir a la reconstrucción de un pasado en el que el aspecto cotidiano cobra significación y nos revela aspectos, hasta ahora desconocidos, de lo que pudieron ser los rasgos y las inquietudes de la vida social y privada de los grupos indígenas en tránsito de aculturación. Nos referimos a los libros parroquiales. Las visitas, así como los expedientes penales, matrimoniales y civiles que se hallan depositados en los archivos

(34) Se da la coincidencia de que estos ocho «ayllus» o «anexos» de que se componía la doctrina de Torata en tiempos coloniales están hoy representados en otras tantas unidades de producción: Queli, Otorá, Chuquisquea e Ilubaya son actualmente caseríos de agricultura, mientras que Yacango es un poblado independiente y Tumilaca y Pocata forman, junto con otros dos anexos, los de Coscore y Tala, la única «comunidad campesina» reconocida del actual distrito de Torata.

(35) Teodoro HAMPE: «Continuidad en el mundo andino. Los indígenas del Perú frente a la legislación colonial (siglo XVI)». En: *América Indígena*, vol. XLV, nº 2, abril-junio 1985, pág. 382.

arzobispaes, nos han proporcionado, junto a los documentos de tipo notarial, un material muy rico para el desarrollo de un estudio sobre comunidades andinas (36). En esta ocasión, las reducciones serán tratadas exclusivamente en el marco del papel que desempeñan en la configuración del panorama agrario —en concreto la tenencia de la tierra—, objeto del presente estudio.

La historiografía andina admite la idea de que las culturas preincaicas combinaron la «posesión» familiar (como usufructo), con la naturaleza eminentemente colectiva de la tenencia y trabajo de la tierra, y que los recursos se orientaban hacia el autoabastecimiento y hacia la provisión de excedentes en beneficio de los jefes locales. Con el advenimiento de los incas, este sistema agrario no habría sufrido modificaciones sustanciales, a excepción de que los excedentes comunales, así de productos como de trabajo, debían incrementarse para nutrir ahora las arcas del Inca y del culto del nuevo Estado. Estas exigencias demandaron un paralelo aumento de la productividad y una consiguiente racionalización de la explotación de los recursos, que en lo tocante a la agricultura se tradujo en un máximo aprovechamiento del espacio —sistema de terrazas y andenerías— y de los recursos hídricos (represas y acequias).

Los reasentamientos indígenas propuestos por Toledo, tampoco significaron una variación sustancial de la organización de los recursos internos. Sin embargo, la falta de racionalidad en la producción agropecuaria, sí provocó un profundo cambio en el paisaje agrario colonial. En el valle de Moquegua, y más concretamente en la antigua doctrina de Torata, se produjo durante la etapa colonial un drástico retroceso agrario, cuyo origen ha recibido atención por parte de geólogos y antropólogos. Unos y otros han abordado el análisis desde sus respectivas disciplinas, y parece admisible que el natural deterioro de los suelos y la degradación de la fertilidad se combinaron con causas de orden cultural, como fue el abandono de los canales de irrigación tras el impacto de la Conquista. Ello obligó a retraer la frontera agrícola hacia las zonas próximas a las bocatomas de los ríos (37).

(36) Los primeros avances sobre esta cuestión se encuentran en nuestro trabajo: "Pasado y presente de una comunidad andina. La tierra como dispositivo de cambio". En: *Actas del IX Congreso Internacional de Historia de América (AHILA): "Europa e Iberoamérica. Cinco siglos de intercambios"*, Sevilla, octubre de 1990. En prensa.

(37) Reina VRIES, Jorge TAPIA y Nicole NOTE: "La Pampa Collabaya. Estudio preliminar sobre la recuperación de andenes en el Departamento de Moquegua". En: *Trabajos Arqueológicos en Moquegua, Perú*, (Programa Contisuyo), vol. 2, págs. 205-235, Lima, 1990.

Las comunidades que actualmente forman parte del distrito de Torata, y cuyos «anexos» coinciden, tanto en su denominación como en el emplazamiento, con los antiguos ayllus de aquella doctrina, se ven hoy, efectivamente, constreñidos a los espacios que bordean el río, mientras que las ruinas de los antiguos asentamientos, así como las andenerías y canales abandonados, ponen en evidencia la intensa y extensa actividad agrícola que debió caracterizar esta zona en tiempos prehispánicos.

Actualmente, la Corporación de Desarrollo de Moquegua (CORDEM) y el Ministerio de Agricultura, están promoviendo estudios, en colaboración con el Programa Contisuyo (38), para sondear las posibilidades de recuperar estos amplios espacios abandonados. El trabajo de campo llevado a cabo en la comunidad de *Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala* —dentro del distrito de Torata y antigua doctrina del mismo nombre—, nos ha brindado la ocasión de comprobar que la recuperación de la antigua frontera agrícola, forma también parte de las expectativas prioritarias de sus actuales comuneros.

* * *

Por lo que se refiere al sistema de tenencia, la legislación toledana tampoco significó en sí misma un drástico cambio con respecto a los tiempos incaicos, ya que las reducciones fueron dotadas de espacios comunitarios para asegurar el pago de los tributos, y poner al indio bajo el control directo de la Corona, una vez erradicado el servicio personal. En efecto, una provisión suscrita en 1536 ordenaba «guardar el orden que tenían los indios en la distribución de tierras y participación de aguas» (39). Este «orden» consistía en la distribución anual de parcelas entre los indios tributarios que tradicionalmente eran «pedidas» en el sentido quechua de *manay* que significa «reclamar» (40). Y, además en el aprovechamiento simultáneo de los recursos comuna-

(38) El *Programa Contisuyo* ha sido fruto de un convenio entre el Museo Peruano de Ciencias de la Salud y el Museo Field de Historia Natural de Chicago, con el aval del Instituto Nacional de Cultura del Perú. El mismo tiene su sede en la ciudad de Moquegua, donde trabaja un equipo permanente de arqueólogos, antropólogos e historiadores de diversas nacionalidades, con el objeto común de desarrollar estudios relacionados con el valle de Moquegua.

(39) HAMPE [35], pág. 382.

(40) Giorgio ALBERTI y Enrique MAYER: "Reciprocidad andina ayer y hoy". En: *Reciprocidad e intercambio en los Andes Peruanos*, Instituto de Estudios Peruanos, "Perú Problema, 12", Lima, 1974, pág. 15.

les, según un sistema de producción que implicaba intensas relaciones de reciprocidad, de tal modo que la producción servía de marco y enlazaba a todo un universo económico, social y de creencias. Sin embargo en la práctica, y al abrirse a la mentalidad de los indios al concepto de la «privacidad» (41), las tierras asignadas a cada reducción o doctrina serían progresivamente acaparadas por los propios indios con un carácter particular, y en especial por los caciques, siendo otras veces los españoles quienes se apoderaron de ellas mediante los mecanismos que antes hemos descrito. Paralelamente a esta tendencia también se incrementaría la individualización en la responsabilidad en otros aspectos de la vida cultural.

El concepto de propiedad a escala individual entre los indígenas, se había visto sustentado por el sistema de reparto de tierras decretado en las Ordenanzas del virrey Toledo para las reducciones, que otorgaron a los indios parcelas de cultivo en régimen de explotación familiar, al mismo tiempo que se asignaban espacios comunitarios para uso de todos los habitantes de cada reducción. Burga advierte que en el valle de Jequetepeque, a finales del XVIII, el vocablo «comunidad» cayó en desuso para referirse a las reducciones, y las tierras «de comunidad» se fueron fragmentando en minifundios que pasaron a manos de los tributarios (42). Esta misma tendencia es la que se observa en el valle de Moquegua, donde para esas fechas la mayoría de los indios disponían, cuando menos, de una parcela o «hacienda» en propiedad. Cuando el intendente Don Antonio Alvarez y Jiménez visitó las siete doctrinas de Moquegua entre 1791 y 1792, las halló a todas ellas despojadas de sus tierras comunitarias y, tras exigir su composición por parte de quienes las ocupaban sin títulos de propiedad, (fueran españoles o indios), obligó al establecimiento de las llamadas «cajas de Comunidad», que se nutrirían con estos recaudos así como las rentas de los alquileres, y vendrían a constituir desde entonces el principal patrimonio comunitario de estas reducciones (43).

La relación de indios propietarios de tierras en las doctrinas de Moquegua, evidencia esta realidad ya desde fines del XVIII.

(41) Esta cuestión ha sido tratada en nuestro trabajo: "Pasado y Presente de una comunidad andina. La tierra como dispositivo de cambio", [36].

(42) Manuel BURGA: *De la encomienda a la hacienda capitalista. El valle del Jequetepeque del siglo XVI al XX*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1976, pág. 88.

(43) BARRIGA [17], vol. II, págs.: Torata, 202; Carumas, 212, Puquina, 274; Ubina, 227-28; y Omate, 251.

Concretamente el anexo de Pocata registraba para 1813, ciento quince indios adultos (de ambos sexos), de los cuales cincuenta y siete figuraban como «labradores propietarios» (44). También en Puquina de los 590 indios adultos que había «entre originarios y forasteros», solamente 81 carecían de tierras, dándose la circunstancia de que estos últimos eran todos forasteros. Los 509 propietarios, distribuidos entre diecisiete ayllus se repartían 140 topes, mientras que los 81 no propietarios, insertos en los mismos ayllus que los anteriores, tenían a su disposición sin carácter de propiedad diez topes de tierra (45).

La documentación notarial de Moquegua del siglo XVIII hace constante alusión a cartas de venta o arrendamiento, evidenciando la institucionalización de la propiedad indígena, de acuerdo al concepto occidental del término, aún cuando la misma no fuera legalmente reconocida hasta 1825, ya en la etapa republicana. Veamos unos ejemplos:

Manuel Mamani, indígena contribuyente, vecino del pago de Pocata de este distrito de Torata, por el tenor de la presente carta *vendo y doy en venta perpetua* a Micaela Dueñas... Todo ello lo suso dicho traspaso a la dicha compradora para que *suyo propio* lo pueda vender, donar, cambiar, enajenar y disponer como de *cosa suya propia* y adquirida con legítimo título de compra... (46).

La terminología empleada en los testamentos de Torata evidencian igualmente este proceso de privatización: «Las tierras que he gozado por ración, las dejo bajo los cercos *que me corresponden*» (47); «Ignacio Marra, indio del pago de Pocata... declara por *sus bienes*, un chacra de maíz en el pago de Pocata» (48).

En cuanto a los bienes comunitarios —la mayoría de ellos, ya convertidos en rentas—, se siguieron destinando a cubrir las

(44) "Padrón del ayllu de Pocata para el año de 1813". AAA, Moquegua-Torata, legajo 4.

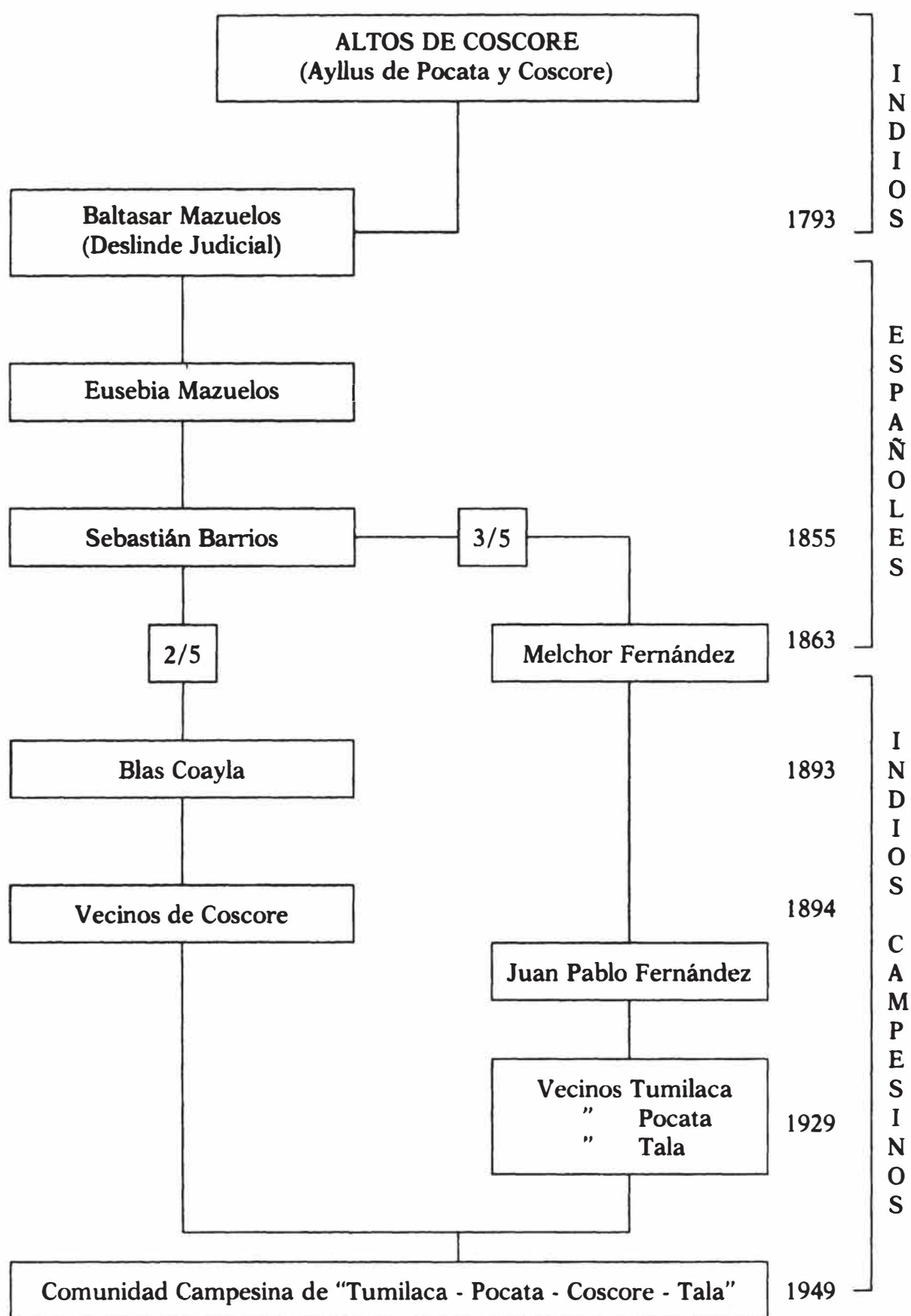
(45) "Relación de propietarios de tierras (indios originarios y forasteros) contenida en el padrón de la doctrina de Puquina. Octubre de 1792". AAA, Doctrina de Puquina (Moquegua). Expedientes administrativos, leg. 2.

(46) "Carta de venta del indio Manuel Mamani, Pocata, 1832". ADM, sec. Alcaldes de Torata, fol. 677.

(47) "Testamento de Juana Gutiérrez, Torata, 3 de mayo de 1833". ADM, Sec. Alcaldes de Torata, fols. 661-664.

(48) "Testamento de Ignacio Marra, Pocata, 8 de marzo de 1806", 2 ADM, Sec. Alcaldes de Torata, fols. 35-36.

CUADRO I



necesidades derivadas de la educación y del culto, que se materializaron en el mantenimiento de una escuela con su maestro, y del cura doctrinero, la iglesia y los gastos suntuarios relacionados con la capilla. Habría que seguir indagando sobre la incidencia que estos fondos comunitarios tuvieron en el pago de los tributos antes de aventurar cualquier hipótesis al respecto. En Torata, a pesar de que Álvarez y Jiménez declarase en 1792 que no existían tierras de comunidad (49), lo cierto es que los Protocolos Notariales de Moquegua, algunos de cuyos registros se hallan actualmente depositados en las dependencias del Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas (INDEC), muestran que en el año 1793 el alcalde de Torata, en connivencia con los caciques de Coscore y Pocata, procedió al deslinde judicial de los «terrenos comunales» que todavía quedaban en esos dos anexos los «Altos de Coscore», terrenos que fueron adquiridos aquel mismo año por Baltasar Mazuelos.

Posteriormente, esta tendencia de «descomunitarización» de la propiedad, adoptaría signos diametralmente opuestos, con vistas a la potenciación de las comunidades indígenas. En el *cuadro 1* puede verse la evolución seguida por estas tierras hasta llegar a revertir la propiedad en sus dueños originales, los comuneros de Pocata y Coscore, a quienes se unieron los de Tumilaca y Tala para optar juntos, los cuatro anexos colindantes, a la formación de la actual comunidad campesina reconocida, de «*Tulaca, Pocata, Coscore y Tala*». Este objetivo sólo lo lograrían siglo y medio después, una vez que los comuneros pudieron presentar en 1949 las escrituras de compra de aquellas tierras que, según reconocían las propias autoridades ministeriales del Perú, les pertenecían *desde tiempo inmemorial y sin interrupción* (50).

Parece claro, pues, que a fines del siglo XVIII, lo privado primaba sobre lo comunitario en todos los órdenes de la vida. Quedaba así propicio el terreno para que a partir del 8 de abril de 1824, pudiera darse cumplimiento al Decreto de Bolívar, en virtud del cual se ordenaba el reparto a sus usufructuarios de las tierras que, tras la Independencia, quedaban todavía en régimen comunal, reconociéndose un año más tarde legalmente la «propiedad privada» del indígena. Pero —insistimos— se trataba de un proceso ya iniciado en tiempos coloniales. El espíritu que inspiraba la política metropolitana en torno a la cuestión de la

(49) BARRIGA [17], vol. II, pág. 200.

(50) ADM. Protocolos Notariales. Sec. República, fols. 245-247, Notario Norberto Dávila.

privatización de la tierra, había experimentado un importante giro en los últimos años de la colonia. En este sentido fue muy significativo el texto del Decreto que las Cortes Generales reunidas en Cádiz promulgaron al filo de la Independencia, y cuya orden fue distribuida a las doctrinas del valle de Moquegua en marzo de 1814, prescribiéndose su pregón público para que «las tierras comunes se reduzcan a dominio particular en beneficio de los pueblos /para/ fomento de la agricultura e industria». He aquí alguno de los fragmentos:

Don Fernando Septimo por la gracia de Dios... y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino nombrada por las Cortes Generales y extraordinarias... sabed que las Cortes han decretado lo siguiente:

... Considerando que la reduccion de los terrenos comunes a dominio particular es una de las providencias que más imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura e industria; y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta clase de tierras un auxilio a las necesidades públicas, un premio a los beneméritos defensores de la patria, y un socorro a los ciudadanos no propietarios, decretan:

Primero: todos los terrenos baldíos o realengos y de propios y arbitrios, con arbolado o sin él, así en la Península e islas adyacentes como en las provincias de Ultramar, excepto los ejidos necesarios a los pueblos, *se reducirán a propiedad particular...*

Segundo: de cualquier modo que se distribuyan estos terrenos, será en plena propiedad y en clase de acotados, para que sus dueños puedan cercarlos sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos y servidumbres, disfrutarlos libre y exclusivamente y destinarlos al uso y cultivo que más le acomode; pero no podrán jamás pasarlos ni vincularlos en ningun tiempo ni por títulos alguno a manos muertas.

Tercero: en la enajenación de dichos terrenos, serán preferidos los vecinos de los pueblos en cuyos términos existan y los comuneros, en el disfrute de los dichos baldíos... (51).

(51) "Decretos de las Cortes de Cádiz y orden de divulgación mediante pregón en la doctrina de Omate (Moquegua). Omate, 26 de mayo de 1814". ADA, Sec. Intendencia-Administrativo, fols. 8-19. El texto jurídico íntegro en SOLANO [6], págs. 547-550.

CONSIDERACIONES FINALES

El panorama agrario que hemos esbozado hasta aquí nos presenta por otra parte, una imagen de la reducción indígena, muy distante de aquella «república de indios» que se pretendía mantener separada de los espacios culturales, económicos y sociales del Estado colonial (52). A comienzos del siglo XIX, por el contrario, la reducción había introducido en su estructura agraria, no sólo los elementos propios del concepto occidental de propiedad, sino que había hecho partícipe de las mismas a españoles e indios según puede verse en el siguiente *padrón* de 1813, correspondiente a la doctrina de Torata:

Resumen total del número de almas por sus clases y ayllus

El Pueblo /Torata/, españoles	406
El Pueblo /Torata/, indios	731
Yacango, españoles	229
Yacango, indios	447
Tumilaca, españoles	23
Tumilaca, indios	204
Pocata, españoles	0
Pocata, indios	205
Chuchusquea, españoles	0
Chuchusquea, indios	287
Otora, españoles	30
Otora, indios	128
Queli, españoles	39
Queli, indios	171
Yluvaia, españoles	50
Yluvaia, indios	78
Total de almas	3.028 (53)

Es decir, tenemos para el año 1813 en la doctrina de Torata

(52) Libro VI, título 9, ley 14, *Recopilación de las Leyes de Indias*. Madrid, 1680. Ediciones Facsímiles de Cultura Hispánica. Madrid, 1973.

(53) "Informe del cura Francisco Javier Vargas, Torata, julio de 1813" AAA, Doctrina de Torata (Moquegua), Padrones, leg. 4.

2.451 indios y 777 españoles. La distribución interna de estas tierras y su valor, se nos presenta en este otro Informe, en el que lamentablemente sólo se mencionan las cifras correspondientes a las tierras comunales y a las tierras de españoles, omitiéndose aquellas otras pertenecientes a los indios con carácter particular:

Consta, con todos sus ayllus, de cincuenta y tres haciendas, 5 comunes de indios, todas tierras de panllevar, cuyos senbríos y frutos son trigo, maíz y alfalfa. En tierras comunes de indios se regulan como novecientos topos, y como tres mil más o menos en tierras y haciendas de españoles. En los ayllus o anexos de pueblo /Torata/, Yacango y Tumilaca se tasa cada topo a trescientos pesos mas o menos según sean sus llanuras, planos y figura, y vale cada topo de arrendamiento quince o más pesos. En los demás anexos se tasa a doscientos pesos el topo, y su arrendamiento es de diez o doce pesos (54).

Además, el mencionado padrón hace referencia al *oficio* del cabeza de familia, a su estado y *cualidad étnica*, dándose la circunstancia de que todos los habitantes identificados como indios, son al mismo tiempo cualificados ya con el oficio de labradores.

En el padrón de 1787 de otra de las doctrinas consultadas hasta el momento, la de Omate, hemos encontrado también una relación de «los españoles que *han entrado a ser tributarios*, y que por serlo repugnan pagar [la imposición fiscal correspondiente a predios rústicos] hasta nueva determinación» (55).

Al filo de la República, los indios de las reducciones así configuradas por la fragmentación y privatización de la propiedad, seguían, junto con una considerable proporción de españoles, adscritos a la categoría de tributarios, ya que sus chacras habrían tenido su origen en una donación o «merced» de Su Majestad. Según veíamos al comienzo, este tipo de propiedad no se consideraba «predio rústico» sino tierra sujeta a tributo. Pero al mismo tiempo se daba la circunstancia de que tales parcelas o fundos no tenían ya un carácter usufructuario, sino que constituían propiedades en regla toda vez que eran, según hemos visto, susceptibles de compra-venta y arrendamiento y transmisibles

(54) *Ibidem*.

(55) "Padrón de junio de 1787". AAA, Doctrina de Omate, legajo 1.

por herencia. Además la producción apuntaba ya a una incipiente orientación mercantil (56).

Podemos concluir considerando que al expirar la etapa colonial, ya el indio estaba en condiciones de pasar automáticamente a formar parte de la pirámide social del Estado nacional, asumiendo en su ancha base un status que venía marcado por su doble categoría económica y fiscal: la de *labrador-tributario*. Esta situación, al mismo tiempo, le adscribía a la condición étnica de *indio*, independientemente de que fuera en realidad blanco o mestizo, situación que se mantendría hasta que fuera abolido el tributo indígena en 1854, fecha en que el *labrador-tributario* o *indio* pasó a ser considerado en el contexto jurídico global bajo la sola categoría económica de *campesino*.

(56) ADM, Protocolos Notariales, fols. 358v-359, Notario Norberto Dávila. Pease registra en el *Primer Libro Notarial de Moquegua* [5] la presencia de contratos de fletamiento de harina del anexo de Tumilaca con destino al altiplano a partir de 1587. En general abundan las escrituras sobre comercialización de productos agrícolas, ganado, ropas y coca.